



RUNRUNES

El 2017 cerró de *capas caídas*. El inicio de 2018 no fue fácil, la crisis económica golpea a la gran mayoría de los hogares venezolanos y va teniendo cada vez más signos evidentes de una calidad de vida que se deteriora a pasos agigantados. El Gobierno responde encerrado en su propia lógica de guerra y la oposición no termina por amalgamar una propuesta sustancial

A finales del año 2017 un nuevo término comenzó a hacerse presente en las críticas, quejas y reprimendas de los venezolanos, la hiperinflación. Algo que ya tiempo atrás diversos economistas habían vaticinado, se asentó como una nueva realidad y una escalada más en la feroz crisis que atraviesa el país.

La inflación venezolana en 2017, sin tener las cifras oficiales del Banco Central, fue de 2.616 %, según calcula la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Por su parte, la firma Ecoanalítica la estimó en 2.735 %. Fue en el mes de octubre cuando la inflación mensual fue superior a 50 %, cota reconocida por los estudiosos de la economía, desde hace sesenta años, para marcar el ingreso de un país en la zona de la hiperinflación.

Esto se ha traducido en altísimos precios que van cambiando y en aumento aceleradamente, destruyendo la capacidad de

compra de la moneda sin importar el número de aumentos salariales que se decreten. La dinámica hiperinflacionaria impone a los venezolanos la necesidad de modificar sustancialmente sus hábitos de vida. Rutinas o “gustos” que en otro tiempo eran “normales” y hasta “básicos”, son hoy absolutos “lujos”, por ejemplo, comprar un café en una panadería o comer empanadas en la calle, comprometen severamente el presupuesto y la subsistencia de una familia promedio.

A la hiperinflación se le suma el “corralito” no decretado con respecto al acceso de dinero en efectivo. Simplemente no hay efectivo suficiente para atender la excesiva demanda que necesita la población. En general, las agencias bancarias están entregando por taquilla entre 10 mil y 30 mil bolívares diarios, una mínima porción que es incapaz de comprar un kilo de arroz, leche en polvo o café.

SIGNOS DE UNA ECONOMÍA INCOHERENTE

La dinámica de la crisis económica venezolana da signos evidentes de que depende, en gran medida, de las malas decisiones e indecisiones del Gobierno nacional. Por más que este quiere adjudicar la crisis a “saboteadores” de la oposición, su responsabilidad en la situación es absoluta.

Un breve repaso sobre algunas inconsistencias e incoherencias de la actualidad económica nos dan cuenta no solo de la magnitud de la crisis, sino de la irresponsabilidad del Gobierno por no hacer lo necesario y suficiente, así por ejemplo tenemos que:

- Una gandola que distribuye gasolina tiene la capacidad de almacenar 36 mil litros de combustible. El precio del litro de gasolina de 91 octanos es de un bolívar y la de 95, es de seis bolívares. Es decir, la carga total de una gandola cuesta 36 mil bolívares o 216 mil bolívares, según sea el caso.

Viendo esto así, podemos decir que el costo de la carga de un camión con gasolina de 91 octanos es más barato que un *snack* de 110 gramos comprado en un supermercado, ya que su costo está por encima de los 35 mil bolívares. Y una gandola cargada con combustible de 95 octanos, es más barata que un cartón de huevos, cuyo precio está alcanzando los 300 mil bolívares, y sigue subiendo semana a semana.

- Otra distorsión se puede encontrar en el metro de Caracas. La compra del *ticket* de un viaje simple en el metro tiene un costo de cuatro bolívares, que en el contexto hiperinflacionario que vivimos es una nimiedad si consideramos que una fotocopia con hoja blanca tamaño carta está costando aproximadamente 1.500 bolívares.

Al *ticket* del metro habrá que sumar que se trata de un cartón, con banda metálica, más el mantenimiento de los torniquetes, etcétera. Es decir, probable-

mente al metro de Caracas le saldría más económico dejar el servicio gratuito, antes que invertir en el costo de impresión de los *tickets*.

FIN DE AÑO SIN GASOLINA

A finales del año 2017, en plenas fechas decembrinas y de preparativos para la Navidad, fue evidente el colapso del sistema de producción e importación de gasolina en el país. En al menos ocho estados se registró una fuerte carestía de combustible aunado a larguísimas colas para surtir de gasolina en las pocas estaciones de servicio a las que les llegó.

En un primer momento se decía que los estados más afectados eran Táchira, Barinas y Zulia, pero fue posible constatar que la crisis impactó también a los estados no fronterizos, especialmente en Mérida, Portuguesa, Lara, Cojedes, Yaracuy y Carabobo.

Oficialmente Pdvsa se disculpó por lo que consideró un “retardo” en el despacho de combustible (mencionando solo a los estados fronterizos), esto debido al “bloqueo internacional” que impide el normal funcionamiento del mercado interno.

Lo cierto parece ser, según afirman varios expertos en el área, que en el 2018 la crisis de la falta de combustible se mantendrá, ya que la capacidad de

Pdvsa va siendo cada vez más limitada y dependiente de las importaciones que realice.

SAQUEOS Y DESTROZOS EN CALABOZO

Desde tempranas horas del sábado 13 de enero se registraron numerosos saqueos en el centro de Calabozo, estado Guárico. Al parecer todo inició cuando un grupo de personas irrumpió en un centro de acopio de la red Mercal en el sector Pinto Salinas, esto generó una reacción en cadena que se extendió hacia diversos negocios de la población.

Se vieron afectados mercados de alimentos y almacenes de ropa y línea blanca. Se supo que al mediodía, y en el transcurso de la tarde, la Guardia Nacional hizo acto de presencia para intentar reinstaurar el orden público en la zona.

La situación en Calabozo es una exposición de la latente tensión social en la que se encuentra el país. Por las redes sociales se han publicado otros hechos que dan cuenta de la misma tensión, así se pudo conocer que, en la población de Palmarito, estado Mérida, un grupo de personas irrumpieron violentamente en una hacienda para matar y robar las reses del lugar porque tenían hambre.

No se justifican estos hechos, pero una reinterpretación de sus



PANORAMA



REUTERS

causas permite entrever la agudización de una crisis social que tiene, además, sus consecuentes reflejos económicos y políticos.

Según el Observatorio venezolano de conflictividad social, en los primeros once días de 2018 se han registrado 386 protestas producto de la crisis alimentaria, una cifra que supera el total de manifestaciones contabilizadas en el mes de enero de 2017.

SOBRE EL DIÁLOGO GOBIERNO-OPOSICIÓN

El 13 de enero el Gobierno y la oposición volvieron a *encontrarse las caras* en la mesa de negociaciones que se está dando en República Dominicana. Los temas que se propusieron eran de los más complicados: elecciones libres (presentado por la oposición) y reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (presentado por el Gobierno). A estos temas se le suma también lo relacionado con la escasez de alimentos y medicinas.

Se trata de un espacio que requerirá de mucha paciencia y constancia si se quiere llegar a algún acuerdo sustentable que dé verdaderas respuestas a la crisis. Para el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, se han presentado “importantes avances” y se fijó una nueva cita para el 18 de enero.

Por otra parte, un sector de la oposición que se ha tenido como el ala más radical y reaccionaria, en la que se encuentra el ex alcalde Antonio Ledezma y la dirigente de *Vente Venezuela*, María Corina Machado, han afirmado que el diálogo se trata de una “burla” al pueblo venezolano y lo único que garantizaría es que el Gobierno siga ganado “tiempo” para continuar con su dictadura. La propuesta y la llamada de Machado es a la “protesta”.

LAS SUNDDE OFERTAS

A inicios de 2018 unas 26 cadenas de supermercados fueron obligadas, por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), a bajar los precios de distintos productos.

La orden, que no detalla el porcentaje de la rebaja, afecta a unos 214 establecimientos pertenecientes a cadenas nacionales y regionales como Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Excelsior Gama, Luvebras, Plan Suárez y los superpermercados Garzon, y Sigo.

La medida se da luego de que la Superintendencia recibiera “una denuncia” sobre los precios en los supermercados y después de comprobar “que en las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación”.

Para el diputado José Guerra, la medida tendrá sus consecuencias y se puede resumir en aquello de “comida para hoy y hambre para mañana”. La medida generó que los supermercados quedaran casi vacíos, con muy poca mercancía, además de una pérdida económica significativa debido a la discrecionalidad de una medida que no tomó en cuenta los costos de reposición, así como los gastos normales y operativos de los locales.

Los supermercados debieron paralizar los pedidos a los proveedores, pues los precios que les ofrecen son mayores a los que establece la Sundde. Poste-

riormente, la Asociación venezolana de supermercados y la Sundde sostuvieron una reunión en la que se acordó que la Superintendencia suspendería las fiscalizaciones y se comprometió a otorgar las garantías necesarias para que los supermercados puedan reponer sus inventarios.

ASESINATO DE OSCAR PÉREZ

El ex inspector del CICPC, Oscar Pérez —quien cobró renombre luego que en junio del año pasado utilizara un helicóptero del CICPC y sobrevolara por el centro de Caracas y otras zonas de la ciudad, lanzando cuatro granadas hacia la sede del TSJ, algunos disparos contra el edificio del Ministerio de Relaciones Interiores, además de declararse en sublevación en contra del Gobierno de Maduro—, fue asesinado por los cuerpos de seguridad en un operativo conjunto que tuvo lugar en El Junquito.

Pérez, quien hasta entonces era el hombre más buscado del país, transmitió a través de sus redes sociales varios videos donde aseguraba que él y su grupo estaban rodeados, que querían entregarse, pero no se les permitía. En una inusual transmisión, con el rostro ensangrentado, afirmó que los funcionarios estaban disparando, que no aceptaban negociar y que los querían matar.

Al final del día el ministro Reverol confirmó su muerte. En torno a Pérez giraban una serie de enigmas, muchas preguntas sin responder y hasta el escepticismo sobre sus verdaderos propósitos. No obstante, para diversas organizaciones de DD.HH. y activistas, el operativo fue irregular y lo califican como de ejecución extrajudicial.